



GD-F-008 V.9

Página 1 de 6

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010078655 DEL 16/05/2017

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

**EL ASESOR QUE FUNGE COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE
CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de CASABIANCA del Departamento de TOLIMA, es de categoría 6 y al no haber sido prestador directo de los servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053405 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al Municipio de CASABIANCA del Departamento de TOLIMA, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

“(i) Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya.”



La referida resolución se notificó personalmente al alcalde del Municipio de CASABIANCA, el día 16 de noviembre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de CASABIANCA del Departamento de TOLIMA, interpuso recurso de reposición el 2 de diciembre de 2016 en contra de la Resolución No. SSPD 20164010053405 del 30 de septiembre de 2016.

Que esta Superintendencia a través de resolución SSPD No. 20174010005935 de 13 de marzo de 2017 rechazó el recurso de reposición por presentarse extemporáneamente.

Que el día 4 de abril de 2017, el Municipio de CASABIANCA del Departamento de TOLIMA, a través del radicado 2017529022877, solicitó la revocatoria directa de la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO

2.1. De los argumentos del ente territorial

Como argumentos de la solicitud de revocatoria, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Manifestó que la Superintendencia efectuó un indebida, irregular o defectuosa notificación de la Resolución No. SSPD 20164010053405 del 30 de septiembre de 2016, debido a que la citación para la notificación personal no se envió en los términos establecidos en el artículo 68 del CPACA, es decir, con plena inobservancia de la ley.

2.1.2 Afirmó, igualmente, que se llevó a cabo la notificación subsidiaria por aviso de forma irregular, en razón de que se envió dicha notificación el 18 de noviembre de 2016, siendo esta fecha posterior a la notificación personal realizada el 16 de noviembre de 2016.

2.1.3 Adujo que con dicha comunicación creó confusión en la administración municipal en cuanto a los términos para presentar el recurso de reposición.

2.1.4 Sostuvo que, a pesar de que reconoce que la notificación personal prima sobre la notificación por aviso, con dicha actuación la Superintendencia violó el debido de proceso al hacer incurrir en error a la administración municipal.

2.1.5. Argumentó que la Superintendencia aplica con rigurosidad y literalidad las actuaciones que adelantan los destinatarios de los actos administrativos, pero con ligereza y discrecionalidad cuando se trata de los procedimientos que adelanta como entidad pública.

2.1.7. Por último, alegando una violación al debido proceso y agravio injustificado al municipio, invocó los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la ley 1437 de 2011.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica una decisión administrativa contraria a la Constitución Política o a la ley; al interés público o social, o atenten contra él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el artículo 93° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*

2. *Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Respecto de la primera causal, esta procede cuando se demuestra la manifiesta ilegalidad del acto, esto es, el quebrantamiento de las normas superiores. Se refiere a la obligación de la Administración de expedir actos administrativos conforme con el ordenamiento jurídico, vale decir, de tal forma que las disposiciones en él contenidas no contravengan normas de orden superior. Esta causal busca que el acto administrativo goce de legitimidad en la medida que sea compatible con la Constitución y la ley.

Por su parte, el agravio injustificado al que se refiere la tercera causal, debe entenderse como una ofensa o perjuicio extraordinario o anormal que exceda de lo razonable, y si bien éstos (ofensa y perjuicio) pueden ser ilegales, la causal tiene como finalidad la protección de la persona individualmente considerada y su interés particular, afectados por las decisiones de la Administración.

Cabe anotar que el artículo 94 de la ley 1437 de 2011 prevé que la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte, no procederá por la causal del numeral primero del artículo 93, es decir “*Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley*”, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el recurrente solicita que se revoque el acto mediante el cual se descertificó al municipio, este Despacho procederá a analizar los argumentos establecidos por él, con el fin de establecer si existe procedencia o no respecto a la revocatoria solicitada.

El primer requisito cuyo incumplimiento es objeto de debate, se relaciona con la notificación de la Resolución que determinó la descertificación del municipio, el cual se alega como violatorio del debido proceso y, por lo tanto, como cumplimiento de la causal del numeral 1º del artículo 93 del CPACA.

Sobre el particular, cabe anotar que la revocatoria de los actos administrativos por su oposición a la Constitución Política o a la ley, implica el análisis de la conformidad del acto administrativo con normas de superior jerarquía, pero además la ilegalidad debe ser manifiesta, es decir, que “... *el quebrantamiento de las normas superiores no debe implicar mayor análisis;*...”, tal como lo señala el tratadista Enrique José Arboleda Perdomo¹.

Ahora bien, es menester señalar que el acto de notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de una actuación administrativa y de su desarrollo, de forma que se asegure los derechos de defensa, contradicción e impugnación.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que la notificación personal prevalece sobre las demás notificaciones, en sentencia T – 210 de 2010, destaca en un aparte la importancia de la notificación de los actos administrativos de la siguiente manera:

“La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de

¹ Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Segunda edición actualizada LEGIS, págs. 149 y 150.

celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes”.

En cuanto al primer requisito mencionado por la Corte Constitucional, se entiende que al conocerse el fondo y sentido de la decisión se asegura el cumplimiento del principio de publicidad.

Es importante resaltar que la notificación no afecta la validez del acto administrativo, sino que, como se mencionó, se enfoca meramente en su publicidad para verificar su eficacia, en ese sentido, al conocerse el fondo de la decisión, se garantiza y observa como cumplido el debido proceso pues se permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción, de acuerdo a lo establecido en el segundo requisito mencionado por la Corte Constitucional.

Con respecto del tercer requisito, relativo a la adecuada notificación, se hace referencia al contenido de la misma, es decir, que es importante que se establezca lo que se pretende notificar, la autoridad que la profirió, el contenido íntegro, auténtico y gratuito de ésta y los recursos que proceden contra la decisión, ya que en caso contrario la notificación será defectuosa y no producirá efecto alguno.

Es pertinente resaltar que el Consejo de Estado ha manifestado que “... la falta o indebida notificación del acto definitivo, no es per se causal de nulidad de los actos administrativos (artículo 84 del Código Contencioso Administrativo); la violación del debido proceso como motivo de nulidad se refiere a la formación del acto, no a su falta de notificación...”².

Cobra relevancia mencionar que la notificación personal realizada al Municipio de CASABIANCA - TOLIMA el 16 de noviembre de 2016, prevalece sobre la notificación por aviso enviada el 18 de noviembre de 2016, al considerarse esta última como subsidiaria.

De acuerdo con lo citado en los párrafos anteriores, vale decir que en la actuación que nos ocupa se garantizó la publicidad del acto administrativo con la asistencia del alcalde municipal el 16 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la Superintendencia para conocer el fondo y sentido de la Resolución que descertificó al Municipio de CASABIANCA - TOLIMA.

Igualmente, que se garantizó el debido proceso al cumplirse la finalidad de la notificación, la cual implica, según el segundo requisito mencionado, que el administrado tenga la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción. Es decir, que el Municipio de CASABIANCA - TOLIMA al conocer el 16 de noviembre 2016 la decisión, tuvo la oportunidad de defenderse y contradecir el fondo de la Resolución de descertificación.

Asimismo, que la notificación personal se realizó en cumplimiento de lo requerido por la ley para entenderse como debida notificación, es decir, se dejó constancia de la Resolución que descertificó al municipio para la administración de los recursos del SGP, de la autoridad, en cabeza del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y del recurso de reposición que procedía contra esta dentro de los 10 días posteriores a la notificación personal. A continuación, se observa la imagen de la diligencia de notificación personal:

² (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo), no nulo(5). [26 de noviembre de 2009, expediente 17295].



NT-F-002 V 1

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Página 1 de 1

En la Ciudad Bogotá D.C. a los 16/11/2016, se presentó el señor WILLAN CARDONA OROZCO, siendo las 13:28, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.165 402 expedida en Bogotá, en su calidad de Alcalde del municipio CASABIANCA- TOLIMA, se notifica personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20164010053405 del 30/8/2016 proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo "Por la cual decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP – APSB, correspondiente a la vigencia 2015".

Contra el acto administrativo que se notifica procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto ante el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo dentro de los (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión.

Notificado:

WILLAN CARDONA OROZCO

C.C. No. No 80.165 402 de Bogotá

Notificadora Designada

MARÍA EUGENIA SIERRA BOTERO

NOTIFICADORA DESIGNADA POR EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (RESOLUCION NO. SSPD 20144000050035 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014)

En resumen, que al cumplirse los requisitos mencionados relativos a la notificación personal el alcalde de CASABIANCA conoció el fondo de la decisión, en cumplimiento de los requisitos del artículo 67 del CPACA, se permitió su derecho de defensa y se surtió de esa forma el debido proceso.

En definitiva, con la notificación personal se cumplieron los requisitos de legalidad que establece la ley para la publicidad y eficacia de los actos administrativos de carácter particular, es decir, los argumentos del municipio con respecto de la supuesta violación del debido proceso al realizarse indebida notificación no prosperan.

Ahora bien, con respecto de la tercera causal de revocatoria, de acuerdo con la doctrina expuesta por el autor Enrique José Arboleda Perdomo, *"la expresión agravio injustificado debe ser entendida como una ofensa o perjuicio extraordinario o anormal que exceda de lo razonable, y si bien éstos (ofensa o perjuicio) pueden ser ilegales, la causal también tiene como finalidad controlar la ponderación del elemento discrecional en las decisiones"*³.

Sobre esta causal, jurídicamente no es posible presumir el agravio injustificado y en la solicitud de revocatoria no se aporta prueba siquiera sumaria de la existencia del mismo.

En ese sentido, es importante poner de presente, que el proceso de certificación reviste una función administrativa y no sancionatoria, por medio de la cual esta Superintendencia evalúa la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

Así, al llegarse a la conclusión de que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP – APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre.

Vale aclarar que a pesar de que los recursos pasan a ser administrados por el ente departamental, este no puede variar la destinación inicial de los mismos, ya que es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación

³ Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Segunda edición actualizada LEGIS, págs. 149 y 150.

eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio.

Por esta razón, dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria que implique un daño o detrimento patrimonial para el municipio recientemente descertificado y, por lo tanto, como un agravio injustificado configurado en la tercera causal del artículo 93 de la ley 1437 de 2011.

En este orden de ideas, al no configurarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, no se revocará el acto administrativo cuya revocatoria es solicitada por el municipio.

En mérito de lo expuesto, el asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REVOCAR la Resolución No. SSPD 20164010053405 de 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de CASABIANCA del Departamento de TOLIMA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de TOLIMA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Andrés Felipe Saavedra Reyes – Abogado contratista– Superintendencia Delegada AAA.

Aprobó: Carlos Andrés Bernal Casas – Coordinador Grupo de Certificaciones e Información.

Expediente: 2016401351600095E